



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-006-2019-00536-01
Demandante:	María Eulalia Hernández Pimienta
Demandado:	Protección S.A.
Asunto:	Consulta sentencia
Procedencia:	Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Pensión de sobrevivientes, condición más beneficiosa

Medellín, julio quince (15) de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, una vez cumplido el traslado a las partes para presentar sus alegaciones, decide el grado jurisdiccional de consulta en favor de la parte actora, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, el 28 de febrero de 2022, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la señora MARIA EULALIA HERNANDEZ PIMIENTA en contra de la

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PROTECCIÓN S.A., Radicado 05001-31-05-006-2019-00536-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

La señora MARIA EULALIA HERNANDEZ PIMIENTA, llamó a juicio a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN S.A., pretendiendo que en aplicación del principio de la condición más beneficiosa y en conforme al Acuerdo 049 de 1990, se reconozca el derecho a la pensión de sobrevivientes y se ordene su pago, con el respectivo retroactivo, indexación e intereses moratorios.

En respaldo de tales pedimentos, se indicó, que la señora María Eulalia Hernández Pimienta convivió con el señor Pedro Julio Gutiérrez Palacio, como compañera permanente desde el 14 de enero de 1994 hasta el 22 de julio de 2001, fecha en la cual contrajeron matrimonio, que el señor Gutiérrez Palacio falleció el 29 de marzo de 2013, contando con 163.28 semanas cotizadas.

Se narró que la accionante solicitó a Protección S.A., el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, prestación que le fue negada bajo el argumento de que el causante no cotizó 50 semanas en los últimos tres años.

1.2.- CONTESTACIÓN

PROTECCIÓN S.A. dio respuesta al libelo introductorio, aceptando como cierto que la actora y el señor Pedro Julio Gutiérrez Palacio contrajeron matrimonio en la fecha señalada, asimismo, lo referente al fallecimiento del señor Gutiérrez Palacio, la solicitud elevada por la pretensora para el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia, la negativa de la AFP y el reconocimiento de la devolución de saldos, aclarando que el afiliado fallecido

cotizó 174.71 semanas y finalmente, sostuvo que no le constan los demás hechos.

En oposición a la prosperidad de las pretensiones formuló las excepciones de inexistencia de la obligación; cobro de lo no debido; buena fe; pago; compensación y prescripción.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

Mediante sentencia proferida el 28 de febrero de 2022, el Juzgado de conocimiento declaró prospera la excepción de inexistencia de la obligación propuesta por Protección S.A. y condenó en costas a la apoderada de la demandante.

La parte demandante no presentó recurso de apelación, enviándose el proceso en el grado jurisdiccional de consulta.

1.4.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal se pronunciaron los apoderados de las partes. La procuradora judicial de la actora, indicó que se ratifica en los hechos y pretensiones, poniendo en conocimiento que actúa en el proceso de manera gratuita, en aras de apoyar a la demandante quien es una persona de avanzada edad y precaria situación. Por otra parte, solicita no se le imponga sanción como apoderada con la condena en costas.

El apoderado de Protección S.A., solicita se confirme la decisión de primera instancia, en tanto que la entidad comparte en su totalidad los argumentos allí expuestos.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Procede la consulta, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone “*Las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario serán necesariamente consultadas con el respectivo Tribunal si no fueren apeladas.*”

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que la señora María Eulalia Hernández Pimienta y el señor Pedro Julio Gutiérrez Palacio, contrajeron matrimonio católico el 22 de diciembre de 2001, tal y como se desprende del registro civil de matrimonio visible a folio 15 del anexo 01 del expediente digital.
- Que el señor Pedro Julio Gutiérrez Palacio, falleció el 29 de marzo de 2013, según informa el registro civil de defunción que milita a folios 13 del anexo 01 del expediente digital.
- Que la señora María Eulalia Hernández Pimienta solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia el 09 de febrero de 2017, prestación que le fue negada por Protección S.A. por medio de comunicado fechado del 11 de abril de 2017, reconociendo en su lugar, la devolución de saldos, en cuantía de \$1.501.716,86, así se desprende del documento obrante a folios 34 a 36 del anexo 01 del expediente digital.

- Que el causante contaba con 174.71 semanas cotizadas en toda su vida laboral, de conformidad con la historia laboral que obra en el expediente a folio 116 a 119, generada el 29 de enero de 2020.

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe la Sala determinar:

¿Si se encuentra ajustada a derecho la sentencia proferida el 28 de febrero de 2022 por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, determinando para tal fin, si la señora María Eulalia Hernández Pimienta, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivencia, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, bajo los requisitos del decreto 758 de 1990, en caso afirmativo, si procede el reconocimiento de los intereses moratorios y la indexación?

2.4. TESIS

Problema jurídico que se resuelve bajo la tesis según la cual el afiliado fallecido no cumplió con el número mínimo de semanas, para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivencia en favor de sus beneficiarios, no acreditando la demandante el cumplimiento de los requisitos para ser acreedora de la prestación, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa y bajo los requisitos del decreto 758 de 1990, razón por la cual, la sentencia debe ser CONFIRMADA.

2.5- PREMISAS NORMATIVAS

Como lo ha precisado de tiempo atrás la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser

dirimido, por regla general, a la luz de la normatividad vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado, entre otras véase sentencias CSJ SL 36135 del 10 junio de 2009, SL42828 del 1º febrero de 2011, SL 7358 (46780) del 23 junio de 2014 y más recientemente la sentencia SL 529 de 2021.

Los artículos 12 y 13 de la Ley 797 del 2003, que modificaron los artículos 46, 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, vigentes para la fecha del fallecimiento del señor Pedro Julio Gutiérrez Palacio, establecen los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes, así como los beneficiarios de la misma, así:

El artículo 12 de la Ley 797 del 2003, es del siguiente tenor:

“Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

- 1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,*
- 2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento”*

PARÁGRAFO 1o. Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley.

“ARTÍCULO 13. Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

- a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte...”*

2.6. CASO CONCRETO

En el presente asunto, es claro y así se plantea por la parte actora desde la demanda, que el señor Pedro Julio Gutiérrez Palacio no acredita las 50 semanas de cotización en los 3 años anteriores al fallecimiento, por lo que la prestación no se causó, conforme al artículo 12 de la Ley 797 de 2003, pues el causante solo presenta cotizaciones hasta el 27 de diciembre del año 2003.

Anota la Sala que el asegurado tampoco genera el derecho a la pensión de sobrevivencia, en aplicación del parágrafo del citado artículo 12 de la ley 797 de 2003, toda vez que para ello se exige haber cotizado el número de semanas mínimo requerido para la pensión de vejez en el régimen de prima media, y como se indicó en líneas anteriores, el causante solo cotizó 174.71 semanas en toda su vida laboral.

Ahora bien, la excepción a la regla general de aplicación de la norma vigente, se presenta en las hipótesis en que la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, han considerado procedente la aplicación ultractiva de normas anteriores ya derogadas, en virtud del principio de condición más beneficiosa.

La Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia del 25 de julio de 2012, radicado 38674, MP Carlos Ernesto Molina Monsalve, al realizar el análisis de la aplicación de la condición más beneficiosa, admitió su procedencia cuando se presenta tránsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y Las leyes 797 y 860 de 2003, sostuvo su procedencia:

‘B. CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA EN EL TRÁNSITO LEGISLATIVO ENTRE LEY 100 DE 1993 Y DISPOSICIONES LEGALES POSTERIORES.

Sin embargo, dada la nueva composición de la Sala, se considera pertinente reexaminar el tema, sobre la inaplicabilidad de la condición más beneficiosa para dirimir los conflictos cuando la invalidez ocurre en vigencia del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, y el afiliado, al momento de su entrada en vigencia, cumple con el requisito de las 26 semanas de cotización que consagraba el modificado artículo 39 de la citada Ley 100 de 1993,

para estimar que en estos casos sí procede dicho principio legal y constitucional en la sucesión de esos dos ordenamientos, por lo siguiente:

a) El principio de la condición más beneficiosa, como antes se dijo, mantiene o respeta la situación individual alcanzada bajo una norma, frente a la situación impuesta por un precepto legal posterior, que ha establecido un tratamiento más gravoso con respecto a la primera disposición.

b) Dicho principio, en consecuencia, se aplica en aquellos casos en que una norma instituya condiciones más gravosas que las ordenadas por la legislación inmediatamente anterior, y se han consolidado las condiciones de ésta.

Posteriormente, mediante sentencia SL 4650 de 2017, la corporación en cita, interpreta que debe existir un límite temporal para la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, señalando así, que el mismo está sujeto a un plazo razonable de tres años contados desde la vigencia de la nueva ley:

*“Entonces, algo debe quedar muy claro. Solo es posible que la Ley 797 de 2003 difiera sus efectos jurídicos **hasta el 29 de enero de 2006**, exclusivamente para las personas con una expectativa legítima. Con estribo en ello se garantiza y protege, de forma interina pero suficiente, la cobertura al sistema general de seguridad social frente a la contingencia de la muerte, bajo la égida de la condición más beneficiosa. Después de allí no sería viable su aplicación, pues este principio no puede convertirse en un obstáculo de cambio normativo y de adecuación de los preceptos a una realidad social y económica diferente, toda vez que es de la esencia del sistema el ser dinámico, jamás estático. Expresado en otro giro, durante dicho periodo (29 de enero de 2003 – 29 de enero de 2006), el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 continúa produciendo sus efectos con venero en el principio de la condición más beneficiosa para las personas con expectativa legítima, ulterior a ese día opera, en estrictez, el relevo normativo y cesan los efectos de este postulado constitucional. No puede la Corte pasar por alto que esta franja de tres años, a más de tornarse razonable y proporcional favorece, a quienes tenían dicha situación concreta al momento del tránsito legislativo”.*

Criterio que ha sido reiterado, entre otras, en las sentencias SL5412 de 2019, SL 2753 de 2020 y SL 2819 del 2020.

En este caso el causante no fallece dentro del límite temporal fijado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, por lo que no le es, en

principio, aplicable el principio de la condición más beneficiosa respecto a la ley 100 de 1993.

Ahora bien, la Corte Constitucional, a partir de la sentencia SU 005 de 2018, ajustando su línea jurisprudencial, acoge como regla general la tesis de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en los siguientes términos:

(iv) La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el principio de la condición más beneficiosa de una forma que lejos de resultar constitucionalmente irrazonable es acorde con el Acto Legislativo 01 de 2005. Para dicha Corte, este principio no da lugar a la aplicación ultractiva del Acuerdo 049 de 1990 u otros regímenes anteriores. Por tanto, el hecho de que el cotizante hubiese realizado aportes pensionales, por lo menos por el número mínimo de semanas previsto en dicha normativa para acceder a la pensión de sobrevivientes, sumado a la muerte del cotizante tras la expedición de la Ley 797 de 2003, no genera el derecho a recibir la pensión de sobrevivientes para el beneficiario. Esta regla, en todo caso, sí ha considerado la aplicación ultractiva de las disposiciones de la Ley 100 de 1993, para efectos del cómputo de las semanas mínimas de cotización, únicamente en aquellos supuestos en los que la muerte del afiliado hubiese acaecido dentro de los 3 años posteriores a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003[97].

164. *(v) No obstante, para la Corte Constitucional, la regla dispuesta por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia sí resulta desproporcionada y contraria a los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida en condiciones dignas, cuando quien pretende acceder a la pensión de sobrevivientes es una persona vulnerable. En estos casos, los fines que persigue el Acto Legislativo 01 de 2005 -hacer viable el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, en condiciones de universalidad y de igualdad para todos los cotizantes- tienen un menor peso en comparación con la muy severa afectación de los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida en condiciones dignas de las personas vulnerables. Por tanto, solo respecto de estas personas resulta proporcionado*

interpretar el principio de la condición más beneficiosa en el sentido de aplicar, de manera ultractiva, las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 —o regímenes anteriores— en cuanto al primer requisito, semanas de cotización, para efectos de valorar el otorgamiento de dicha prestación económica, aunque el segundo requisito, la condición de la muerte del afiliado hubiese acaecido en vigencia de la Ley 797 de 2003. Si bien estas personas vulnerables no adquirieron el derecho a la pensión de sobrevivientes en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, los aportes del afiliado, bajo dicho régimen, dieron lugar a una expectativa que, por las circunstancias particulares del tutelante, amerita protección constitucional.

165. *(vi) Solo para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se considerarán como personas vulnerables aquellos individuos que hayan superado el Test de procedencia antes descrito. Para estas personas, las sentencias de tutela tendrán efecto declarativo del derecho y solo se podrá ordenar el pago de mesadas pensionales a partir de la presentación de la acción de tutela.*

Conforme a ello, la regla dispuesta por la Sala Laboral de la Corte Suprema, que impide la aplicación de normas que no corresponden a las inmediatamente anteriores y exige que la contingencia se hubiese presentado dentro de los tres años posteriores a la ley, no resulta desproporcionada y contraria a los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida en condiciones dignas, **salvo** cuando quien pretende acceder a la pensión de sobrevivientes es una persona vulnerable, de acuerdo con la metodología fijada por la Corte Constitucional a través de un test de procedencia, caso en el cual se exhibe proporcionado aplicar de manera ultractiva el principio de condición más beneficiosa acudiendo a las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 o regímenes anteriores en cuanto al requisito de semanas de cotización.

No desconoce la Sala que el máximo Tribunal de la Jurisdicción ordinaria ha ratificado de la improcedencia del denominado salto normativo para la aplicación del decreto 758 de 1990, precisando que ello no puede sujetarse a la condición de vulnerabilidad del posible beneficiario, tal como precisó en la sentencia SL1888 del 10 de junio de 2020 M.P Luis Benedicto Herrera Díaz, entre otras:

“De la lectura del aludido fallo de tutela fácilmente se advierte que el denominado «test de procedencia» no tiene por objeto reemplazar las reglas legales que regulan la pensión de sobrevivientes en las muchas disposiciones ya citadas en esta providencia, pues aparte de que esa no es función constitucional ni legal de la jurisprudencia de las Cortes, allí claramente se dejó sentado que el denominado test tiene por objeto --en el ámbito de la acción constitucional de tutela que no en el procedimiento ordinario laboral o en la institución sustancial del derecho prestacional aquí estudiada, cuyos marcos normativos son de orden público y están plenamente reglados en las aludidas disposiciones ya indicadas, se repite--, «flexibilizar el requisito de subsidiaridad de la acción de tutela», como mecanismo procedimental para perseguir el acceso a la pensión de sobrevivientes en el régimen de prima media con prestación definida, como en su texto se menciona, se itera.

Al respecto, vale la pena recordar que el acceso a la pensión de sobrevivientes no está supeditado a que el pretenso beneficiario de la prestación acredite una condición particular de vulnerabilidad, superando condiciones o reglas establecidas en test como el de la referencia, cuyo objeto ya se ha dicho es diametralmente otro no como desatinadamente se sugiere por la censura, sino al cumplimiento de los requisitos exigidos en el régimen pensional que resulta aplicable.

Dentro del referido contexto, la Sala no puede compartir argumentos de facto que creen condiciones de acceso a la pensión de sobrevivencia contra la descripción normativa, pues ello conduciría a una inequívoca tergiversación de la institución sustancial de esta prestación, llevándose de calle el elaborado principio jurisprudencial de esta Corporación de la llamada «condición más beneficiosa», con lo que se abriría paso a una aplicación retroactiva de la ley que, a la postre, terminaría vulnerando principios de estirpe constitucional como los de igualdad y seguridad jurídica.

Conviene precisar que esta Corporación, como tribunal de casación y órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, tiene a su cargo la unificación e integración de la jurisprudencia en estas materias, de suerte que, las posturas que se fijen en ejercicio de esta labor no se deslegitiman o invalidan por el hecho de que otras autoridades judiciales, administrativas o de control, adopten criterios diferentes, menos, por el mal entendido que puede darse a decisiones de otras jurisdicciones.

Así las cosas, la Sala tiene definido que normas tales como el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, no pueden aplicarse de forma indefinida bajo el amparo de la condición más beneficiosa o de otras figuras --con el pretexto de proteger a sujetos en estado de vulnerabilidad, por ejemplo--, pues tal situación, se insiste, además de conducir al desconocimiento del orden jurídico vigente y dar lugar a la aplicación retroactiva de la ley, lo que hace es quebrantar valores de rango superior.

No obstante, esta Sala de Decisión, se aparta de la referida tesis, para acogerse en este tema a la sentencia de unificación SU 005 de 2018, en tanto tal postura, constituye una acción afirmativa del Estado, para amparar los derechos de la población vulnerable.

Zanjada la discusión anterior, compete verificar el cumplimiento de los requisitos del artículo 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, norma que pretende la gestora del proceso sea aplicada, la cual dispone:

“Cuando la muerte del asegurado sea de origen no profesional, habrá derecho a pensión de sobrevivientes en los siguientes casos:

- a) Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el número y densidad de cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la pensión de invalidez por riesgo común y,*
- b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando o tenga causado el derecho a la pensión de invalidez o de vejez según el presente Reglamento”.*

En igual sentido, conforme al artículo 6 Acuerdo 049 de 1990, el causante debe acreditar 150 semanas cotizadas dentro de los 6 años anteriores a la fecha del fallecimiento o 300 semanas en cualquier tiempo, causadas en la vigencia del Decreto 758 de 1990, es decir, dicha densidad de cotizaciones debe reunirse al 1° de abril de 1994, calenda en la cual entra en vigencia la Ley 100 de 1993.

En el sub lite, es claro que con las semanas efectivamente cotizadas por el causante, no se cumple con el requisito de las 300 semanas al 1° de abril de 1994 y respecto del requisito de las 150 semanas en los 6 años anteriores a la muerte, el mismo tampoco se acredita, pues en dicho periodo el señor Pedro Julio Gutiérrez Palacio no registró ninguna cotización, siendo evidente, que la apoderada de la actora presenta un entendimiento diferente de la norma, al considerar que solo debe acreditarse más de 150 semanas cotizadas en toda la vida laboral.

En cualquier caso, advierte la Sala que tampoco es posible determinar si la accionante cumple con la totalidad de los parámetros del test de procedencia establecido por la Corte Constitucional en la aludida sentencia SU 005 de 2018, que permita deducir su estado de vulnerabilidad e inaplicar las reglas ya indicadas, establecidas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en tanto que la escasa prueba documental allegada, no permite tenerlos por satisfechos y la parte actora no solicitó prueba testimonial.

Conforme a lo anterior, se colige que se encuentra ajustada a derecho la sentencia objeto de consulta, razón por la cual se impone su confirmación.

Por último y en lo referente a la solicitud presentada por la apoderada de la demandante en la fase de alegatos de conclusión cumplida en esta instancia, tendiente a que no se le sancione con la imposición de condena en costas, no es procedente emitir un pronunciamiento, en tanto que, dicha condena siendo

parte del fallo de primera instancia, no fue objeto de reparo en la oportunidad procesal pertinente, puntualizando que la consulta se surte en favor de la parte y no de la apoderada y en cualquier caso, en dicha solicitud se hace referencia a situaciones que no se encuentran acreditadas en el plenario y que ni siquiera eran conocidas por la judicatura, como lo es el carácter gratuito del mandato.

Sin costas en esta instancia.

3. DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley:

FALLA

1.- Se **CONFIRMA** la Sentencia de Primera Instancia proferida por el Juzgado Sexto Laboral de Circuito de Medellín, el 28 de febrero de 2022, en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora MARIA EULALIA HERNANDEZ PIMIENTA en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

2.- Sin costas en esta instancia.


3. Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3º literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la

Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,


SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE


JULIO RAFAEL FORDECILLA PAYARES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO